

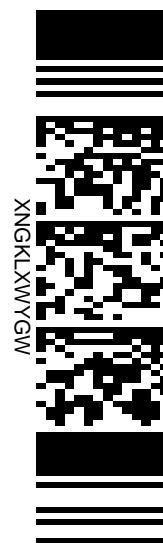
Talca, veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

En estos autos seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Talca, por sentencia definitiva de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se acogió la demanda deducida por Anselmo Antonio Cancino Sepúlveda en contra del Fisco de Chile, y se condenó a este último a pagar al demandante la suma de \$40.000.000 por concepto de indemnización por daño moral, reajustados en la proporción que experimente el índice de precios al consumidor, más intereses corrientes para operaciones reajustables, desde la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo con costas, razón por la cual, rechazó las excepciones de pago de reparaciones satisfactivas y de prescripción opuestas por el Fisco de Chile.

En contra de dicha sentencia, el apoderado del demandante dedujo recurso de casación en la forma por la causal contenida en el N°5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo establecido en el artículo 170 N° 4 del mismo código; y, en forma conjunta, se alzó contra aquella e interpuso recurso de apelación.

En cuanto a la casación, sostuvo que el fallo no hizo mención ni analizó la declaración de tres testigos presentados por su parte, específicamente los dichos de doña Victoria de las Mercedes Veloso Soto, don José Miguel Guzmán Rojas y don Sandro Gonzalo Gaete, por lo que se ha incurrido en el vicio establecido en la causal señalada. Arguye, que ha quedado en la indefensión, ya que los perjuicios fijados no son fundamentados conforme al mérito de la prueba rendida por su parte, añadió, que los deponentes omitidos sirven para apreciar la magnitud de los daños y perjuicios causados a su defendido, y en definitiva, para acreditar daños morales por un monto superior al fijado por el tribunal de la instancia, por lo que pide admitir el recurso y dictar sentencia de reemplazo, acogiendo la demanda en todas sus partes, fijando una indemnización de \$500.000.000 o la cifra menor que sea igual o superior a la cantidad de \$200.000.000, que se estime en derecho.

En lo que respecta a la apelación, plantea que la sentencia no ha establecido una reparación completa e íntegra de los perjuicios demandados, ignorando o privando de mérito a antecedentes y declaraciones. Reitera, que, en su concepto, con la prueba testimonial se acredita el daño psicológico sufrido por su representado, además, con los informes psicológicos emitidos por la ONG CINTRAS y lo declarado por el testigo José Miguel Guzmán Rojas acredita los daños de su defendido, que detalla. Finalmente, afirma que el fallo no ha analizado con rigor la prueba documental rendida en la causa, especialmente la sentencia definitiva dictada por el Primer Juzgado de Letras de Talca Rol 675-2016; sentencia pronunciada por esta Corte Rol N° 640-2017; y fallo de la Excma. Corte Suprema Rol N° 2471-2018, en las cuales se fijó a la viuda e hijos legítimos matrimoniales del padre de su representado, la suma de \$200.000.000 para



cada uno de los demandantes, por lo que en su concepto, el demandante no puede merecer una cantidad sino igual o superior.

Por su parte, el demandado dedujo recurso de apelación en contra del mismo fallo, por estimar que procedía acoger la excepción de reparación satisfactiva, por existir identidad de causa entre lo pedido en la causa y las reparaciones realizadas por el Estado, entre otras, mediante las Leyes N° 19.123 y N° 19.880, por lo que los mecanismos de reparación han compensado los daños referidos en la demanda, en consecuencia, no pueden ser exigidos nuevamente. Además, se alza por haberse rechazado la excepción de prescripción de la acción civil, conforme a lo dispuesto en los artículos 2332, 2514 y 2515, todas del Código Civil, teniendo presente que la demanda le fue notificada el 14 de enero de 2019. Asevera, que el fallo yerra al indicar que los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile impedirían aplicar la normativa interna sobre prescripción de la acción civil, ya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria y el artículo 63 de dicha Convención está dirigido a la Corte Interamericana y no a los tribunales nacionales. Por otro lado, la Convención de Ginebra solo se refiere a las acciones penales, cita al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, razones por las cuales, en su concepto, procedía acoger la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, aun contabilizándola desde el retorno a la democracia o la entrega del informe relativo a las Víctimas de Prisión y Tortura, pues, la demanda le fue notificada con posterioridad.

En subsidio, plantea que el monto fijado por daño moral es excesivo, por lo que solicita se rebaje a una cantidad que guarde equivalencia y armonía con lo resuelto en casos similares, citando como ejemplo la causa caratulada “Miranda con Fisco”, conocida como la de los torturados políticos de la Isla Dawson, donde se fijó la suma de \$3.000.000.

Se trajeron los autos en relación respecto de ambos recursos.

I.-En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por el demandante:

VISTO Y CONSIDERANDO:

1) Que el recurrente sostiene que la sentencia incurre en el vicio previsto en el N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el N° 4 del artículo 170 del mismo texto legal, esto es, la omisión de las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, ya que el juzgador no analizó los dichos de los testigos doña Verónica de las Mercedes Soto, don José Miguel Rojas y don Sandro Gonzalo Gaete Escobar.



2) Que, de la lectura del fallo cuestionado, se constata que efectivamente el sentenciador de la instancia no analizó los asertos de los tres testigos señalados por el recurrente.

3) No obstante, la omisión antes señalada, la nulidad planteada obedece más bien a una cuestión de fondo que de forma, eventualmente subsanable por el recurso de apelación interpuesto en forma conjunta con este recurso de nulidad, y en que, precisamente, se hace el mismo tipo de cuestionamiento sobre las decisiones y omisiones del órgano jurisdiccional.

En efecto, el análisis jurídico es revisable por la vía de los recursos ordinarios, como lo es el de apelación que aparece deducido en forma conjunta con el recurso en estudio, razón suficiente para desestimar el vicio denunciado.

4) Por lo demás, de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo, tratándose de alegaciones que, como se ha indicado, pueden ser resueltas y en su caso, subsanables los reparos, por otras vías, como el recurso de apelación interpuesto juntamente con este recurso de nulidad, y que, precisamente, se funda en aquellas.

Más aún, considerando que este recurso de nulidad constituye una herramienta procesal de última razón en su aplicación, por ende, existiendo otros medios, procede hacer uso de estos en desmedro de la casación en la forma, como la intentada en autos.

Por lo anterior, la casación de forma debe ser rechazada.

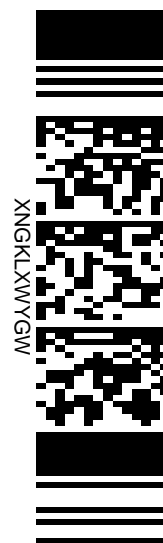
II.- En cuanto al recurso de apelación del demandante:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- Que, en síntesis, el apelante sostiene que el fallo no ha concedido una reparación completa e íntegra de los perjuicios causados por agentes del Estado al actor, ya que se ha ignorado el valor probatorio de declaraciones prestadas en la causa. Al efecto, alude a lo razonado por el juzgador en los motivos DÉCIMO y DÉCIMO TERCERO, considera exigua la suma concedida en el fallo, en atención a las cantidades que obtuvieron la viuda e hijos del padre de su representado, según sentencias que acompaña, como a lo declarado por los tres testigos omitidos, y los informes psicológicos agregados al proceso.

2.- Que, tal como se indicó precedentemente, es efectivo que la sentencia de primera instancia omitió analizar el testimonio de tres testigos presentados por el demandante, que declararon vía exhorto en la ciudad de Santiago.

Ahora bien, en cuanto al tenor de estas, se constata que doña Victoria de las Mercedes Veloso Soto depone que el demandante nació prisionera, ya que su madre lo estaba, por lo que vivió sus primeros meses en la cárcel, además, supo que a su padre lo mataron, pero desconoce el monto del perjuicio ocasionado, agregó, que la madre llegó

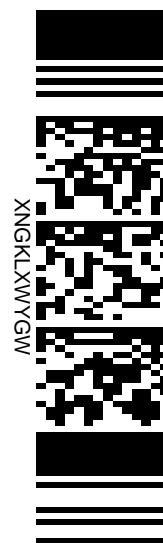


con el recién nacido al Buen Pastor de Linares, donde recibió torturas, pero tuvo a su hijo en el hospital. Por otro lado, don José Miguel Guzmán Rojas refiere que conoce al demandante ya que la organización a la cual pertenece le prestó apoyo psicológico, sostuvo que el actor ha sufrido gravemente en su psiquismo, por la violación de los derechos humanos sufridas por él y su familia. Preciso que nació en cautiverio y es portador de un trauma cónico gravísimo, una adolescencia y juventud marcada por la precariedad, presenta mecanismo defensivos como dificultad para manifestar o reconocer la pena. Indicó, que lo que señala fue consignado en dos informes, que se encuentran agregados a la causa, uno de ellos lleva su firma. Finalmente, don Sandro Gonzalo Gaete Escobar, refirió que pertenece a la Policía de Investigaciones, refiere que le correspondió investigar la muerte del demandado, donde se estableció su secuestro calificado por parte de personal del Ejército, específicamente, de la Escuela de Artillería de Linares. Indicó, que al prestar declaración el actor, lo vio afectado por el secuestro de su padre, además, como este entregó posibles ubicaciones del cuerpo, le correspondió acompañarlo en la diligencia al interior de la Escuela de Artillería del Ejército, al ir en la parte posterior del camión militar con personal de dicha institución, el demandante se colocó a llorar, debiendo ser consolado, ya que esa situación debió ser similar a la experimentada por su padre. Finalmente señaló que constantemente lo encontraba fuera de la oficina del Ministro a cargo de la investigación, a fin de saber los avances del caso.

3.- Que, no obstante la omisión reprochada por el recurrente, del análisis y ponderación de las declaraciones de los testigos doña Verónica de las Mercedes Soto, don José Miguel Rojas y don Sandro Gonzalo Gaete Escobar, todos ellos presentados por el demandante, es posible concluir que en nada alteran lo razonado y resuelto por el juez del grado, ya que la existencia del daño moral demandado se encuentra acreditado en el proceso, con las probanzas que analizó y ponderó el juzgador, a lo que se debe adicionar lo expuesto por estos testigos.

4.- Que, en lo que respecta al monto al cual asciende este daño moral, sus asertos tampoco son suficientes para alterar lo decidido por el sentenciador, desde que fue determinado prudencialmente por el mismo, conforme a los demás elementos probatorios acompañados en la causa, considerando además, las otras reparaciones que ya ha percibido el demandante, siendo el monto fijado en esta causa, un complemento de estas, para permitir de esa manera una reparación integral del daño ocasionado al demandante, conforme a las particularidades de la presente causa.

5.- Que, en nada modifican lo que se viene exponiendo, los informes psicológicos acompañados por el demandante en esta instancia, que rolan bajo los Folios N° 10 y 12, de fechas 26 de mayo y 4 de agosto, ambos del año en curso y suscritos por la psicóloga doña Lorena Pérez Osorio, pues, dan cuenta en similares términos de la situación que



afecta al actor, lo que ya había sido consignado, de manera más extensa y detallada, en los informes acompañados en primera instancia, bajo el Folio N° 26, uno de ellos también suscrito por la misma profesional, y el otro por el testigo recién analizado don José Miguel Guzmán Rojas, y en definitiva, los documentos acompañados ante esta Corte no aportan nuevos antecedentes, que permitan modificar lo concluido por el tribunal del grado.

Por lo que se viene razonando y exponiendo, el recurso de apelación será desestimado.

III.- En cuanto al recurso de apelación de la demandada:

1.- Que, tal como se ha señalado de manera reiterada por los Tribunales Superiores de Justicia, las normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, en lo que interesa, a los tribunales nacionales, en cuanto éstos no pueden interpretar las normas del derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran el derecho a la reparación, ya que, hacerlo de dicha manera, podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Luego, tratándose de una violación a los derechos humanos, el criterio rector, en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil, se encuentra en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos, ya que, este fenómeno de graves transgresiones a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, es posterior al proceso de codificación, que por lo mismo no lo considera, pues, por una parte, responde a criterios claramente ligados al interés privado y, por otra, por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada solo en la segunda mitad del siglo XX.

2.- Que, en razón de lo expuesto precedentemente, no es posible calificar a la acción indemnizatoria, como de índole meramente patrimonial, porque los hechos en que se sustenta son figurativas de un delito de lesa humanidad, del cual emana, además de la acción penal, una civil de carácter humanitario.

En el derecho interno, la Constitución Política de la República en el artículo 5 inciso 2, dispone que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Por otro lado, el delito por el cual se acciona en esta causa es uno de lesa humanidad, además, la obligación indemnizatoria esta originada para el Estado, tratándose de la violación de los derechos humanos, no solo por la Constitución Política



de la República, sino que también por los principios Generales del Derecho Humanitario, y de los Tratados Internacionales sobre la materia, de modo que las normas del derecho interno se aplican si no están en contradicción con esta preceptiva.

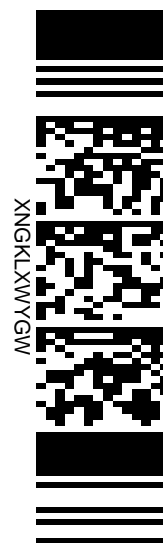
3.- Que, como consecuencia de lo que se viene explicando, las normas de prescripción del Código Civil, no resultan aplicables a la materia en estudio, dado que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas del Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones del Derecho Interno. Por ende, establecida la responsabilidad del Estado surge para este el deber de reparar

A mayor abundamiento, conforme a lo estatuido en los artículos 131 de la Convención de Ginebra y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Estado parte no puede invocar normas de derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, por ello, no es posible concebir la prescripción de la acción penal, en tanto delito de lesa humanidad, razón por la cual, la acción civil derivada del mismo hecho, no puede estar sujeta a las normas de Derecho Interno de prescripción patrimonial de derecho privado, lo que resulta incoherente y contraviene las normas de Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico por disposición expresa del artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política de la República

4.- Que, en consecuencia, se demandaron por el actor los perjuicios causados por el delito de lesa humanidad consistente en el secuestro calificado de su padre Anselmo Antonio Cancino Aravena, según lo resuelto en causa Rol 2182-98 seguida ante el Ministro de Fuero don Alejandro Solís Muñoz, que por sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema de fecha 27 de abril de 2011 condenó a cuatro agentes del Estado como coautores de los delitos reiterados de secuestro calificados de cinco personas, entre ellas, el padre del demandante.

Que, la acción penal relativa a los delitos de lesa humanidad ha sido declarada imprescriptible, en ese sentido, no es coherente entender que la acción civil indemnizatoria, que es consecuencia de aquellos, esté afecta a las normas de prescripción establecidas en nuestra legislación interna, puesto que, ellos sería contrario a la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre derechos humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del citado artículo 5 de la Constitución Política de la República, donde se establece el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia de actos ilícitos.

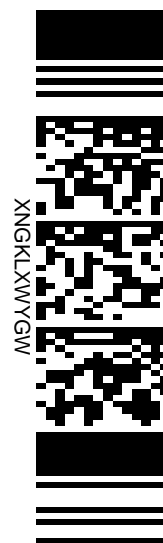
5.- A mayor abundamiento, la norma internacional convencional que obliga de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política de la República para consignar como



imprescriptibles las acciones patrimoniales derivadas de hechos penales categorizados como crímenes de lesa humanidad, es la Convención Interamericana de DDHH, mediante la interpretación jurisprudencial de la Corte Interamericana, que es de carácter obligatoria para Chile, en los casos que se ha dictado sentencia en su contra sobre estas materias. Por ello, Chile tiene una obligación de cumplimiento de esas sentencias en el caso concreto sometido al conocimiento de la Corte Interamericana de conformidad a lo estatuido en el artículo 68. 1 de la Convención al disponer que los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes, de acuerdo con el principio de buena fe, como norma y obligación de cumplimiento de los tratados, consignada en el artículo 26, por ello, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, además, que todas aquellas materias sobre el mismo tema que se presenten en el orden interno y respondan a la misma naturaleza en hechos y derecho aplicable.

En consecuencia, existe un deber de respetar la interpretación de la Corte Interamericana, contenida en las sentencias dictadas en contra el Estado de Chile, que sea aplicable a otros casos de la misma naturaleza. En el caso en estudio, la indemnización civil derivada de un hecho penal cuya naturaleza es la de un crimen de lesa humanidad, es preciso tener en cuenta que la referida Corte ha dictado sentencia de fecha 29 de noviembre de 2018 en contra de Chile sobre este tópico, en el caso Órdenes Guerra y otros v/s Chile, allí, en el los párrafos 89 y siguientes, la Corte Interamericana entiende que la acción civil derivada de delitos de lesa humanidad no es prescriptible, además, consigna que esto ha sido reconocido el propio Estado, es decir, el Estado Chileno comparte el criterio de que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción y que no puede excusarse en el mero paso del tiempo (fundamento de la prescripción), para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo 1973-1990, lo que incluye su arista indemnizatoria.

Así las cosas, aun cuando el derecho positivo nacional reconoce la existencia de la prescripción extintiva de las acciones civiles, en los artículos 2.332 del Código Civil que se refiere a la prescripción de la responsabilidad extracontractual, como los artículos 2.497 y 2.515 de la misma codificación, relacionados con la prescripción extintiva, lo cierto es que los mismos no pueden tener aplicación en el presente juicio, en razón de los hechos en los cuales se edifica la demanda en análisis, por tanto, sus consecuencias jurídicas son imprescriptibles a la luz del Derecho Internacional al cual Chile se ha adherido.



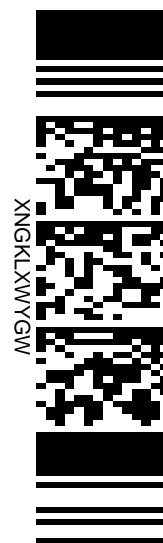
6.- Que, en nuestro derecho interno, la Ley N° 19.123, modificada por la Ley N° 19.980, admitió la existencia de daños y concedió a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario, situación que ya ha sido resuelta en numerosas causas de los Tribunales Superiores de Justicia.

Luego, no debe olvidarse que el objeto de toda acción civil es la obtención de compensación íntegra de los daños ocasionales por el actuar de agentes del Estado, por requerirlo así la aplicación, conforme a la buena fe, de los tratados internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, incorporados al ordenamiento jurídico internacional, entre los cuales está la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación a derechos humanos, según se colige de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la que dispone que la administración está al servicio de la persona humana, su finalidad es promover el bien común y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad. Consecuente con ello, el artículo 4° dispone que el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado. Principio, éste, también incorporado en el artículo 2320 del Código Civil.

7.- Que, por otro lado, no obstante que el demandante ha sido favorecido con beneficios económicos del Estado en virtud de la Ley N° 19.123, debe recordarse que ello es una forma de resarcimiento colectivo complementario a la reparación material del daño moral individual sufrido por las víctimas como consecuencia de la comisión de delitos.

La propia Ley N° 19.123 establece que los beneficios allí contemplados dicen relación con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por Decreto Supremo N° 355 de 25 de abril de 1990, con el propósito de coordinar, ejecutar y promover las acciones que fueran necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en su informe.

Por lo expuesto, aparece con claridad que dichas circunstancias no pueden confundirse con las que emanan del derecho internacional que imponen la obligación de reparación integral, por lo demás, su pago ha sido asumido voluntariamente por el Estado, ello no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare o no su procedencia, por los medios que establece la ley.



Más aún, el artículo 4 de la Ley N° 19.123 señala que en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales. Si en el cumplimiento de sus funciones la Corporación tuviere conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito, deberá ponerlos, sin más trámite, en conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Así las cosas, la suma que ha sido fijada por el tribunal del grado es complementaria a las que ya han sido otorgadas al actor, mediante la concesión de distintos beneficios que le han sido conferidos por el Estado, de manera tal de resarcir de manera íntegra el daño que le ha sido ocasionado, materia de esta causa.

Conforme a las argumentaciones que se viene detallando, se desestimaré la apelación impetrada por el Consejo de Defensa del Estado.

Y visto lo dispuesto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos; los artículos 131 de la Convención de Ginebra; 27 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados; 5 de la Constitución Política de la República, 186 del Código de Procedimiento Civil se declara:

I) Que se **rechaza el recurso de casación deducido** por la demandada en contra de la sentencia definitiva de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa Rol C-3476-2018 por el Segundo Juzgado Civil de Talca.

II) Que se **confirma la sentencia definitiva** veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa Rol C-3476-2018 por el Segundo Juzgado Civil de Talca.

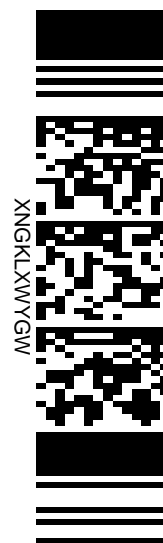
Cada parte deberá asumir sus costas, por no haber resultado totalmente vencidas.

Redacción del Fiscal Judicial don Gonzalo Pérez Correa.

Regístrese y devuélvase.

Rol I.C. 2296-2019/Civil.

Se deja constancia que, pese a haber concurrido a la vista y acuerdo de esta causa, no firma el Fiscal Judicial don Gonzalo Pérez Correa, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

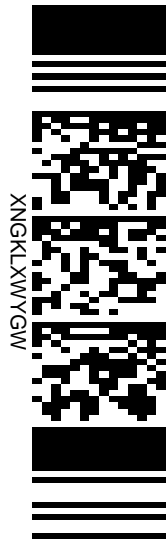




XNGKLXWYGV

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Hernán González G. y Abogado Integrante
Ruperto A Pinochet O. Talca, veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

En Talca, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución
precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.